



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 1084-99-AA/TC
LIMA
ANTONIA CASADO BAÑOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los cinco días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Antonia Casado Baños contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos treinta, su fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES:

Doña Antonia Casado Baños interpone Acción de Amparo contra el Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad Social (hoy EsSalud), a fin de que cumpla con homologar y nivelar su pensión de viudez con la remuneración que percibe un trabajador activo que labora en las mismas condiciones en que laboró su difunto esposo, de acuerdo con el Decreto Ley N.º 20530. Manifiesta que su difunto esposo laboró en dicha institución por más de treinta años, habiendo cesado en el cargo de Director del Hospital Regional N.º 1 de la Oroya. Indica que la demandada ha dejado de homologar y nivelar su pensión de cesantía, toda vez que no cumple con lo dispuesto en las resoluciones supremas N.º 018-97-EP y 019-97-EF, la primera que establece una remuneración de S/. 2,400.00 nuevos soles, para el servidor de la categoría 4, que le corresponde en calidad de viuda, a partir del uno de noviembre de mil novecientos noventa y seis; y mediante la segunda resolución se otorgó una bonificación ascendente a S/. 4,100.00 nuevos soles. Indica que con fecha dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, solicitó que se le abone el 100% de lo que percibe el servidor activo del mismo nivel en que cesó su esposo, habiendo sido denegada su petición mediante comunicación que recibió el veintitrés de noviembre de dicho año, razón por la que interpuso recurso de apelación el veinticinco del mismo mes y año, y no habiéndose resuelto el mismo, consideró dar por agotada la vía administrativa. Agrega que la demandada, con la finalidad de eludir los incrementos a los pensionistas, viene otorgando a los trabajadores activos aumentos con la denominación de puntualidad y productividad, los mismos que al tener el carácter de permanentes son pensionables.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los apoderados del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social y de la Oficina de Normalización Previsional contestan la demanda y de manera coincidente manifiestan que lo solicitado por la demandante no corresponde ser discutido en la presente Acción de Amparo, toda vez que el otorgamiento de un monto mayor por concepto de pensiones requiere de la presentación de diversos documentos y peritajes. Manifiestan que el Instituto Peruano de Seguridad Social ha cumplido con nivelar las pensiones de sus ex trabajadores pertenecientes al régimen del Decreto Ley N.º 20530, en cada oportunidad en que se han incrementado las remuneraciones de sus servidores en actividad, de conformidad con los dispositivos legales vigentes. Indican que la demandante no ha acreditado que los servidores en actividad hayan percibido incrementos de remuneraciones que tengan el carácter de pensionables y que éstos no le hayan sido otorgados.

El Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas ciento treinta y tres, con fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, declaró infundada la demanda, por considerar que los hechos expuestos son de naturaleza controvertible, que requieren para su dilucidación de la actuación de medios probatorios en una etapa pertinente, toda vez que las instrumentales aparejadas no otorgan al juzgador la convicción de verosimilitud de los hechos descritos, razón por la que se deja a salvo el derecho de la demandante para acudir a la vía judicial que corresponda.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos treinta, con fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar que la Acción de Amparo no es la vía idónea para solicitar la homologación y nivelación de una pensión, pues la misma es de naturaleza restitutiva y no declarativa de derechos. Contra esta Resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

1. Que, del tenor de la demanda y demás recaudos se advierte que la demandante a través de la presente Acción de Amparo, pretende que la institución demandada incorpore a su pensión las sumas de dinero que fuera de planillas estarían percibiendo los trabajadores activos desde el mes de mayo de mil novecientos noventa y tres ascendente al 25% de sus haberes por concepto de productividad y del 40% por puntualidad desde el mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Asimismo, solicita que dicha institución cumpla con lo dispuesto en las resoluciones supremas N.º 018-97-EF y N.º 019-97-EF.
2. Que, en cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa propuesta por la demandada, este Tribunal ha establecido que por la naturaleza del derecho invocado, teniendo en consideración que la pensión tiene carácter alimentario, no es exigible el agotamiento de la vía previa; no obstante ello, en el presente caso, la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

demandante con fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho interpuso su recurso de apelación al no haber cumplido la demandada con resolver su solicitud en el plazo que establece la ley.

3. Que, respecto a las bonificaciones por concepto de productividad y por puntualidad que fuera de planillas vendrían percibiendo los trabajadores en actividad que prestan servicios en la institución demandada –según lo señalado en el fundamento primero de la presente–, ello no ha sido acreditado en autos mediante documento idóneo. Asimismo, cabe precisar que mediante la Resolución Suprema N.º 018-97-EF, de fojas diecinueve y siguientes de autos, su fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, se aprobó la Política Remunerativa del Instituto Peruano de Seguridad Social, aplicable a partir del uno de noviembre de mil novecientos noventa y seis; y, conforme se advierte de la copia de la boleta de pago de fojas tres, a la demandante se le viene abonando una suma de dinero en aplicación de dicha escala remunerativa, la misma que a través del presente proceso constitucional no podría ser determinada como diminuta o no, toda vez que para ello resultaría necesario la actuación de medios probatorios, razón por la que se deja a salvo el derecho que pueda corresponderle a la demandante, a fin de que pueda hacerlo valer en un proceso más lato, en el cual se puedan hacer valer las pruebas que las partes consideren conveniente a su interés, a fin de crear certeza en el juzgador respecto de sus alegaciones.
4. Que la Resolución Suprema N.º 019-97-EF establece que la bonificación por productividad tiene la naturaleza de extraordinaria, variable en el tiempo, condicionada a la evaluación del trabajador y se otorga exclusivamente en función a la concurrencia y la prestación efectiva de labores, la dedicación en el trabajo, la productividad y la estructura de niveles, no teniendo la misma el carácter de pensionable para el régimen del Decreto Ley N.º 20530; en consecuencia, tal bonificación no puede ser adicionada al monto de la pensión que viene percibiendo el demandante, toda vez que su goce en una proporción determinada no corresponde por igual a todos los trabajadores, no obstante que pudieran tener el mismo nivel en la institución demandada, sino que su otorgamiento se efectúa en atención a determinados criterios, como son la asistencia, la eficiencia y su permanencia, los cuales varían en función a la responsabilidad y eficiencia de cada trabajador en actividad.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos treinta, su fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

revocando la apelada declaró **IMPROCEDENTE** la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial *El Peruano* y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO

Marcelo S. Acosta

Díaz Valverde

Nugent

García Marcelo

AAM.

Lo que certifico:
César Cubas Longa
Dr. César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR